



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, tres (3) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Referencia: Acción popular
Radicación: 15001 3333 003 **2018 00090 00**
Demandante: Yesid Figueroa García
Demandado: Municipio de Tunja - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF

I. ASUNTO

El Despacho procede a pronunciarse sobre la solicitud de verificación de cumplimiento de la medida cautelar decretada en el asunto de la referencia, presentada por el actor popular.

II. ANTECEDENTES

En la audiencia de pruebas celebrada el 19 de octubre de 2019, con sustento en el dictamen pericial rendido por profesionales de la Oficina Departamental de Prevención y Atención de Desastres, se consideró que la comunidad educativa de la sede San Antonio del Colegio Silvino Rodríguez de Tunja se encontraba en un riesgo latente, comoquiera que si las condiciones climáticas empeoraban, tanto el cerramiento como la parte de la infraestructura que estaba inhabilitada tenían riesgo de colapsar; además, de que era necesario garantizar la tutela judicial efectiva, de manera que se decretó una **medida cautelar preventiva**, consistente en prohibir el uso de los salones que se encontraban inhabilitados; señalar esos salones o esa infraestructura de dos niveles, instalar vallas metálicas a efecto de impedir que los niños y la comunidad educativa en general pudieran acceder a dicha infraestructura.

En Sentencia de 9 de diciembre de 2019 se ampararon los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la salubridad y seguridad públicas, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la realización de construcciones que garanticen la calidad de vida de la comunidad; en consecuencia, entre otras cosas, se dispuso:

“SEGUNDO: Ordenar al municipio de Tunja realizar las siguientes actuaciones a fin de hacer cesar la amenaza y/o vulneración de los derechos colectivos amparados:

- A. *En el término no superior a dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, reubique transitoriamente a la comunidad educativa que desarrolla labores de enseñanza y aprendizaje en la Sede San Antonio del Colegio Silvino Rodríguez de Tunja, hasta tanto se cumpla con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 400 de 1997, en concordancia con la norma NSR-10, o la que este vigente al momento de su ejecución.*

B. Adicionalmente, se ordena al Municipio de Tunja, que en el plazo no superior a seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, procesa a realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones que conforman la Sede San Antonio del Colegio Silvino Rodríguez de Tunja, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 400 de 1997, en concordancia con la norma NSR-10, con el fin de que dentro de los dos (2) años se ejecuten las obras de intervención y reforzamiento que dicho estudio recomiende, incluida la intervención de los elementos no estructurales como el cerramiento perimetral.

(...).

SEXTO: Mantener la medida cautelar decretada para la Sede San Antonio del Colegio Silvino Rodríguez, bajo las siguientes precisiones, las cuales deberán ser materializadas dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente providencia, por parte del Alcalde Municipal de Tunja y el Secretario de Infraestructura de Tunja, de conformidad con la parte motiva, así:

- a) “Ampliar la prohibición de uso de los salones del bloque de dos niveles para todo el bloque tanto primer como segundo nivel, incluso para la actividad de almacenaje.
- b) Complementar la medida relacionada con el muro perimetral para que en los puntos de mayor riesgo de colapso hacia el interior y exterior, se hinquen postes de madera de grosor y altura suficientes al lado inmediato del muro que presente desplome, de tal forma que sirvan de soporte para el sostenimiento mientras se ejecuta la obra definitiva que establezca el estudio de vulnerabilidad sísmica...
- c) Instalar vallas metálicas a efecto de impedir que los niños y la comunidad educativa en general pueda acceder al bloque de dos niveles, el cerramiento perimetral que amenaza colapso por desplome, y el tanque semicerrado obsoleto.
- d) Drenar las canales con el fin de que el agua lluvia o de escorrentía pueda correr libremente por dichas conducciones.
- e) Instruir a la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres con el fin de que realice una nueva charla de socialización a la comunidad educativa, sobre la prevención y la necesidad de no acceder a estos sitios que están amenazando con riesgo latente, relacionados con las presentes ordenes cautelares provisionales, y realice seguimiento periódico a efecto de que se dé pleno cumplimiento...”.

Mediante auto de 5 de marzo de 2020 se requirió al alcalde, al secretario de Infraestructura y los integrantes del Comité de Gestión del Riesgo del municipio de Tunja para que rindieran informe respecto al cumplimiento de dicha medida cautelar.

El secretario de Infraestructura, mediante escrito de 10 de marzo de la presente anualidad, señaló que según lo dispuesto en el literal a) de la medida cautelar, la Secretaría de Educación Municipal reubicó la comunidad estudiantil en la sede Manzanares, por tanto, frente a los órdenes impartidas en los literales b) y c) indicó que el riesgo se componía de dos factores: amenaza y vulnerabilidad; luego, en el

caso concreto si bien existía la amenaza causa por el posible desplome de los muros, no existía vulnerabilidad, comoquiera que no había comunidad educativa en el lugar.

Con relación al literal d) afirmó que la competencia para drenar los canales a fin de que el agua lluvia o de escorrentía pudiera correr libremente, correspondía a la Secretaría de Desarrollo. En lo que toca con el literal e) aseguró que la Unidad Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres estaba realizando charlas y talleres para incentivar la prevención y se estaba programando una nueva charla, según los riesgos que se pudieran presentar en la sede Manzanares.

Ahora bien, en el curso de esta actuación, mediante la Resolución No 385 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social decretó Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación del COVID 19 y mitigar sus efectos.

Como consecuencia de lo anterior, a través de Acuerdo PCSJA20-11517 de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la suspensión de términos judiciales en todo el país a partir del 16 de marzo de 2020 y hasta el día 20 del mismo mes y año, salvo en aquellos despachos judiciales que cumplen la función de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que tuvieran programadas audiencias con persona privada de la libertad. Adicionalmente, se exceptuó el trámite de acciones de tutela.

Esta medida de suspensión de términos judiciales se prorrogó en distintas ocasiones, mediante los Acuerdos PCSJA20-11518, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549 y PCSJA-11556 de 2020, por motivos de salubridad pública y fuerza mayor con ocasión de la pandemia por el COVID-19, catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de impacto mundial.

Por medio de Acuerdo PCSJA-11567 de 5 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el levantamiento de la suspensión de términos judiciales a partir del día 1.º de julio de 2020, inclusive, y dispuso las medidas pertinentes para la reanudación de la atención al público, el normal funcionamiento de los despachos judiciales y se dictaron otras medidas de salubridad pública y fuerza mayor.

A través del Decreto Legislativo No 806 de 04 de junio 2020, el Gobierno Nacional adoptó unas medidas de orden procesal para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Mediante Acuerdo PCSJA20-11581 de 27 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura ratificó el levantamiento de la suspensión de términos judiciales a partir del 1.º de julio de 2020, y puntualizó que las sedes judiciales y administrativas de la Rama Judicial no prestarán atención presencial a usuarios, a menos que de manera excepcional se requiera.

III. CONSIDERACIONES

Contrastadas las órdenes judiciales impartidas para la protección de los derechos colectivos objeto de la presente acción popular con el informe rendido por la autoridad administrativa, el Despacho advierte que las circunstancias que imperaban al momento de mantener y ampliar la medida cautelar —9 de diciembre de 2019— no son las mismas que las que acontecen actualmente, en especial con la Institución Educativa Silvino Rodríguez.

En virtud de lo informado por la Secretaría de Infraestructura se tiene que la comunidad educativa de la sede San Antonio fue trasladada a la sede Manzanares, y que como consecuencia de la declaratoria de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación del Covid - 19 y mitigar sus efectos, los colegios públicos y privados y las universidades e instituciones de educación superior debieron funcionar bajo la modalidad de clases virtuales y trabajo en casa. Es decir, sin la presencia de la comunidad educativa en las sedes educativas.

Conforme a lo anterior, puede considerarse que las medidas dirigidas a: i) ampliar la prohibición de uso de los salones del bloque de dos niveles, incluso para la actividad de almacenaje, ii) Instalar vallas metálicas a efecto de impedir que la comunidad educativa en general pueda acceder a dicho bloque, al cerramiento perimetral que amenaza colapso por desplome y el tanque semicerrado obsoleto y iii) realizar nueva charla de socialización a la comunidad educativa, sobre la prevención y la necesidad de no acceder a estos sitios que están amenazando con riesgo latente, no son exigibles mientras persistan las actuales condiciones de la pandemia del Covid – 19 y la comunidad educativa no asista físicamente a las instalaciones; sin embargo, ello no supone que la medida cautelar hubiere perdido su finalidad, esto es, garantizar la efectividad de la sentencia, pues aquella deberá cumplirse cabalmente en cuanto los docentes, los estudiantes y toda la comunidad educativa retornen a la presencialidad, aun cuando el aforo no sea del ciento por ciento.

Valga mencionar que, aunque la Secretaría de Infraestructura del municipio de Tunja indicó el traslado de los estudiantes, aspecto que implicaría su ausencia de la sede educativa San Antonio, lo cierto es que a partir de la información suministrada no es posible inferir que el traslado de los estudiantes, educadores y, en general, de la comunidad educativa es de carácter permanente. Además, tal como señaló en su informe el secretario de Infraestructura, existe un alto riesgo de desplome del muro perimetral, amenaza que si bien no afecta directamente a las personas que solían acudir a las instalaciones de la sede San Antonio del Colegio Silvino Rodríguez, sí podría constituir una amenaza a la comunidad en general, pues el derrumbe no solo ocasionaría daños dentro de las instalaciones educativas, sino también en el exterior.

Debe recordarse que, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, las medidas cautelares dentro de las acciones populares son mecanismos de contingencia con distintas finalidades, como son: i) prevenir un daño inminente; ii) hacer cesar el que se hubiese causado; y iii) **proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.** En tal virtud, teniendo en cuenta que la decisión proferida dentro de la acción constitucional que nos ocupa no ha cobrado firmeza en tanto fue objeto de apelación, y que el

recurso se encuentra pendiente de ser resuelto por el Superior Funcional, también resulta necesario evitar que el muro en comento corra un riesgo de desplome a fin garantizar la tutela judicial efectiva y de garantizar que las decisiones judiciales se cumplan. Igual situación se presenta con la orden relativa al drenaje de las canales con el fin de que el agua lluvia o de escorrentía pueda correr libremente, pues la Secretaría de Infraestructura se limitó a señalar que era competencia de la Secretaría de Desarrollo, sin que a la fecha se tenga noticia de su cumplimiento.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, según las condiciones que nos rodean a causa de la Emergencia Sanitaria, el Despacho instará al cumplimiento de las órdenes contenidas en los literales a), c) y e) del numeral sexto de la sentencia de 9 de diciembre del año anterior, puntualizada en la medida cautelar decretada en este proceso, en tanto se advierta el retorno de la comunidad educativa a la presencialidad. Respecto a los literales b) y d), esta Judicatura ordenará al alcalde y al secretario de Infraestructura de Tunja su cumplimiento en el término de quince (15) días. En consecuencia, deberán cumplir con la instalación de postes de madera en los puntos de mayor riesgo de colapso hacia el interior y exterior del muro perimetral, los cuales deberán tener grosor y altura suficientes para que sirvan de soporte para el sostenimiento, mientras se ejecuta la obra definitiva que establezca el estudio de vulnerabilidad sísmica; adicionalmente, deberán señalar el citado muro, advirtiendo a la comunidad en general el riesgo de desplome, y, finalmente, drenar las canales con el fin de que el agua lluvia o de escorrentía pueda correr libremente por dichas conducciones.

Vencido el término concedido a las autoridades sin que acrediten el cumplimiento de las órdenes impartidas en esta providencia, se dará inicio al incidente de desacato contemplado en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998¹.

Finalmente, se requerirá a la Oficina de Talento Humano de la Alcaldía de Tunja para que indique al Despacho el nombre completo, número de identificación dirección física del lugar de trabajo y residencia, dirección electrónica para efecto de notificaciones del alcalde, el secretario de infraestructura y los integrantes del Comité de Gestión del Riesgo de este municipio.

Por lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja

RESUELVE

PRIMERO.- Instar alcalde y al secretario de Infraestructura del municipio de Tunja al cumplimiento de las órdenes contenidas en los literales a), c) y e) del numeral sexto de la sentencia de 9 de diciembre del año anterior, puntualizada en la medida cautelar

¹ “**ARTICULO 41. DESACATO.** La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción. La consulta se hará en efecto devolutivo.”

decretada en este proceso, en tanto se advierta el retorno de la comunidad educativa a la presencialidad.

SEGUNDO.- Ordenar al alcalde y al secretario de Infraestructura del municipio de Tunja el cumplimiento de los literales b) y d) del ordinal sexto de la sentencia de 9 de diciembre de 2019, en el término de quince (15) días contados a partir de la notificación del presente auto. En este entendido, deberán adelantar las siguientes actividades:

- Instalar postes de madera en los puntos de mayor riesgo de colapso hacia el interior y exterior del muro perimetral de la Sede San Antonio del Colegio Silvino Rodríguez de Tunja, los cuales deberán tener grosor y altura suficientes para que sirvan de soporte para el sostenimiento, mientras se ejecuta la obra definitiva que establezca el estudio de vulnerabilidad sísmica.
- Señalizar la parte exterior del citado muro, advirtiendo a la comunidad en general el riesgo de desplome.
- Drenar las canales con el fin de que el agua lluvia o de escorrentía pueda correr libremente por dichas conducciones.

TERCERO.- Prevenir a la parte requerida que el incumplimiento de las órdenes impartidas, acarreará las sanciones establecidas en las normas legales por desacato a una orden judicial.

CUARTO.- Requerir mediante oficio a la Oficina de Talento Humano de la Alcaldía de Tunja, o la dependencia que haga sus veces, para que en el término de tres (3) días, contados a partir del recibo de la correspondiente comunicación, se sirva indicar el nombre completo, número de identificación dirección física del lugar de trabajo y residencia, dirección electrónica para efecto de notificaciones del alcalde, el secretario de Infraestructura y los integrantes del Comité de Gestión del Riesgo de este municipio.

Notifíquese² y cúmplase

Firmado Por:

ANGELA MARIA JOJOA VELASQUEZ
JUEZ CIRCUITO

2



JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE TUNJA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

7ff1efd187eba3edb8cde147512c5488a47f609b01b7382603d1a7ddab03d6e3

Documento generado en 03/09/2020 11:29:13 a.m.